



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, once de diciembre de dos mil veintitrés

21-113

Proceso: **APELACIÓN SENTENCIA**
Demandante: **MARI ORFID LÓPEZ VÉLEZ**
Demandado: **COLPENSIONES**
Radicado No.: **05001-31-05-014-2022-00060-01**
Tema: **Reliquidación pensión vejez**
Decisión: **MODIFICA SENTENCIA**

La Sala Tercera de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a conocer el recurso de apelación interpuesto la parte demandada contra la sentencia de primera instancia proferida dentro del proceso de la referencia.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 40** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES

1.1. LO PRETENDIDO

Pretende la parte actora que se condene a COLPENSIONES a reconocer la reliquidación de la pensión de vejez con el Ingreso Base de Liquidación de sus últimos 10 años de cotización y una tasa de reemplazo de hasta el 80% con 1.974 semanas cotizadas a partir del 6 de abril de 2020, junto con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en subsidio la indexación y las costas del proceso.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES EXPUSO, EN SÍNTESIS, LOS SIGUIENTES HECHOS:

- Que tras haber solicitado a COLPENSIONES el 3 de diciembre de 2020 la pensión de vejez, la misma le fue reconocida a través de la Resolución SUB 24674 del 1º de marzo de 2021 a partir del 1º de junio de 2020, en cuantía mensual de \$9.824.873, con un IBL de \$13.493.851, al cual se le aplicó una tasa de reemplazo del 72.81%, con base en la Ley 797 de 2003 por haber cotizado 1.974 semanas.
- Que el 25 de junio de 2021 solicitó la reliquidación de la pensión de vejez, la cual le fue negada a través de Resolución SUB 264825 del 11 de octubre de 2021.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

COLPENSIONES dio respuesta a la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, indicando que no es procedente la reliquidación pues la entidad dio aplicación a lo dispuesto en la Ley 797 de 2003, la cual se liquida de conformidad con el artículo 10 de la Ley 797 de 2003, por el cual se modifica el artículo 34 de la Ley 100 de 1993 y la liquidación se encuentra ajustada a derecho. Respecto a los hechos manifestó que acepta como cierto el contenido de la resolución que reconoció la pensión al actor y la que negó la reliquidación.

1.4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, en **sentencia** proferida el 28 de abril de 2023, **CONDENÓ** a COLPENSIONES a reconocer y pagar a la señora **MARÍA ORFID LÓPEZ VÉLEZ**:

- La suma de **\$25.440.692** por concepto de reliquidación de la pensión de vejez causado desde el 6 de abril de 2020 hasta el 30 de abril de 2023. Y a partir del mes de mayo de 2023 a continuar reconociendo una mesada equivalente a \$12.665.480 sin perjuicio de los incrementos para los años subsiguientes.
- Los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del 4 de abril de 2021 y hasta la fecha de pago efectivo de las sumas adeudadas.
- Y las costas del proceso, fijando las agencias en derecho en la suma de \$2.000.000

2. ARGUMENTOS

2.1. ARGUMENTOS DEL JUEZ

En cuanto a la reliquidación deprecada indicó que conforme al artículo 34 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003, la cuantificación del monto se da en dos etapas, la primera tiene una fórmula decreciente para calcular la tasa de reemplazo, es decir, que a mayor ingreso base de liquidación, menor será la tasa de reemplazo y por el contrario a menor ingreso mayor será la tasa indicada y la segunda un incremento de esa tasa de reemplazo por semanas de cotización adicionales a las mínimas requeridas hasta llegar a un monto máximo del 80% y el 70% del IBL en forma decreciente en razón de los ingresos, calculado con base en la misma fórmula.

Manifestó que si bien anteriormente el entendimiento que se le había dado a dicha norma era que solo podía tenerse en cuenta hasta 1.800 semanas, la Corte Suprema de Justicia a través de la sentencia SL 3501 de 2022, al analizar la interpretación que debía darse a la fórmula contenida en el referida artículo 34, señaló que en la parte final del mismo se enfatiza en que el valor total de la pensión no puede ser superior al 80% de la pensión pero en este caso sin indicar rango alguno de oscilación, por lo que para la Corte es lógico, calcular el monto de la pensión con la tasa de reemplazo variable en función del nivel de ingresos, de suerte que el monto máximo es directamente proporcional al número de cotizaciones adicionales a las mínimas requeridas, es decir, que la tasa de reemplazo depende del nivel de ingresos del afiliado y el monto máximo del número de semanas cotizadas. No obstante, las cotizaciones efectuadas a partir del porcentaje máximo del 80% no se computa ni procede su devolución, en virtud del principio de solidaridad expresado en este tope porcentual sobre el límite de salarios mínimos a los que puede llegar el monto de la prestación pensional otorgada por el sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993. Por tanto en dicha sentencia la Corte señaló que la fórmula decreciente establecida para determinar la tasa de reemplazo, se utiliza cuando se resta a 65.50% los salarios mínimos contenidos en el IBL, pero si se vuelve a utilizar esta para calcular el monto máximo de la pensión, estaría tomando el nivel de ingresos de cotización para disminuir o castigar dos veces el monto de la pensión, lo cual no tiene justificación alguna, pues con la fórmula señalada se pretende desincentivar el aumento injustificado del ingreso base de cotización pero en manera alguna limitar el número de semanas necesarias para alcanzar el monto máximo de la pensión establecido por la norma, salvo la del tope legal de 25 SMLMV.

Consideró que en el caso de la demandante, al aplicar la formula respectiva, teniendo en cuenta que la esta cotizó un total de 1.974 semanas y que su IBL asciende a \$13.493.851 para el año 2020

al dividirlo por el salario mínimo para dicha anualidad que era de \$877.803, se obtiene como resultado 15.37 salarios mínimos, por lo que al multiplicar este resultado por el 0.5 que trae la fórmula se obtiene 7.687, es decir que a 65.50 se resta 7.687 y da un monto inicial del 57.81% y toda vez que a partir de las 1.300 semanas de cotización, la actora cotizó 674 semanas adicional, es decir, que se debe aumentar un 1.5% por cada 50 semanas adicionales, habría que sumar al 57.81% un 19.5%, lo que arroja un monto total de 77.31%, que al aplicarlo al IBL de la actora, la mesada inicial de la actora debió ser \$10.432.770, la cual es superior a la reconocida por la entidad, por lo que condenó a COLPENSIONES a reliquidar la pensión de vejez de la demandante a partir del 6 de abril de 2020, toda vez que ninguna mesada se vio afectada de prescripción.

De otro lado, en cuanto a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 consideró que la postura de la CSJ, estos se aplican de manera objetiva por el solo hecho de haberse verificado un retardo en el pago de la pensión y conforme a sentencias SL1681 de 2020 estos también proceden en el caso de reliquidaciones pensionales, por lo que condenó a la entidad a reconocer los intereses moratorios a partir del 4 de abril de 2021, es decir, 4 meses después de la reclamación de la pensión y hasta la fecha de pago efectivo.

2.2. RECURSO DE APELACIÓN DE COLPENSIONES

Señaló que no es procedente conceder la reliquidación de la pensión de vejez, toda vez que COLPENSIONES tiene criterios normativos y jurisprudenciales con base en los cuales se realizó el reconocimiento y pago de la pensión de la actora concediendo la misma con el monto correspondiente al tope máximo permitido por la Ley, que permite sumar solo un 15% adicional, toda vez que la norma señala que la tasa inicial debe estar entre el 55 y el 65% dependiendo de la cantidad de salarios mínimos devengados y no puede ser superior a la tasa de remplazo del 80%, lo que indica que el porcentaje entre los dos extremos es el 15% y aun cuando se acrediten más semanas el valor de la tasa de reemplazo no aumentara, lo anterior teniendo en cuenta que por cada 50 semanas adicionales a mínimas exigidas aumentará en un 1.5% el valor del monto teniendo un tope máximo del 15%, el cual se alcanzará cuando acredite 500 semanas adicionales a las mínimas exigidas.

2.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término de traslado ninguna de las partes presentó alegatos de conclusión.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

De conformidad con los argumentos esbozados en el recurso de apelación, consiste en determinar si el demandante tiene derecho a la reliquidación de la pensión de vejez, analizando si hay lugar a aplicar un monto superior de conformidad con el artículo 34 de la Ley 100 de 1993 con la modificación del artículo 10 de la Ley 797 de 2003.

Así mismo se analizará en CONSULTA las condenas impuestas a COLPENSIONES que no fueron objeto de apelación, con el fin de salvaguardar los intereses del Estado como garante de esta entidad, conforme a lo señalado por nuestro órgano de cierre en sentencias 51.237 de 4 de diciembre 2013 y 40.200 de 2015.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En primer lugar, la apoderada de Colpensiones manifiesta su inconformidad respecto a la reliquidación ordenada por el a quo, indicando que de acuerdo a la interpretación que debía darse al artículo 34 de la Ley 100 de 1993, el monto máximo a aplicar al actor era del 70.5% dado que dicho artículo contemplaba una formula decreciente en razón de los salarios aportados por el afiliado y que solo podían tenerse en cuenta para aumentar la tasa de reemplazo 500 semanas cotizadas en adición a las mínimas requeridas.

Pues bien, para dilucidar el asunto en cuestión es pertinente citar el texto del artículo 34 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003 que dispuso la forma en que se debía determinar el monto de las pensiones reconocidas conforme a dicha normatividad que se causaren con posterioridad a partir del 1° de enero de 2004, así:

“El monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de cotización requeridas, será del equivalente al 65%, del ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:

$r = 65.50 - 0.50 s$, donde:

r = porcentaje del ingreso de liquidación.

s = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A partir del 2004, el monto mensual de la pensión de vejez será un porcentaje que oscilará entre el 65 y el 55% del ingreso base de liquidación de los afiliados, en forma decreciente en función de su nivel de ingresos calculado con base en la fórmula señalada. El 1° de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 semanas. Adicionalmente, el 1° de enero de 2006 se incrementarán en 25 semanas cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.

A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión

entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima.”

Respecto a la forma en que se debe interpretar dicho artículo ha existido cierta controversia, pues COLPENSIONES por un lado, alega que después de aplicar la fórmula referida en el mencionado artículo, solo podrán tenerse como semanas adicionales para aumentar el monto de la pensión, 500 semanas, es decir, un 15%. Tesis que fue acogida por la Sala de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias SL-3707-2020, SL-4793-2020), al considerar que la tasa de reemplazo que debe oscilar entre el 65 % y el 55 % del IBL, la cual será incrementada en 1.5 % por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, *“... Llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5 % de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización”*.

Sin embargo, esta no había sido la tesis de la Sala principal de la Corte Suprema de Justicia, pues en sentencia SL1456-2015, radicado 45424, que al calcular el monto o tasa de reemplazo, incrementó el ingreso base de liquidación inicial, esto es, el que se obtiene después de aplicar la fórmula *“r=65.50-0,50s”*, contabilizando todas y cada una de las semanas cotizadas con posterioridad a las mínimas exigidas, incluso, las semanas cotizadas por encima de las 1.800, obteniendo como resultado incrementos superiores al 15%.

Si bien es cierto, que la redacción de la norma es confusa y puede dar lugar a interpretaciones diversas y más allá del hecho de considerar o no si la misma establece un límite de semanas respecto de las cuales pueden causarse los porcentajes adicionales sobre el monto o la tasa de reemplazo, puesto que no hace referencia expresa al precitado límite, ni tampoco consagra un monto máximo hasta donde se pueda aumentar la tasa de reemplazo con base en las semanas adicionales, siendo que el único límite establecido, es el 80% del ingreso base de liquidación, lo cierto es que cualquier duda que en este aspecto pudiera surgir, fue despejada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en una de sus salas de decisión permanente, la cual tiene mayor peso como precedente jurisprudencial, que lo que habían decidido las salas de descongestión en las sentencias reseñadas, pues de conformidad con lo previsto en el artículo 2º de la Ley 1781 de 2016, que adicionó un párrafo al artículo 16 de la Ley 270 de 1996 *“... las salas de descongestión actuarán independientemente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pero cuando la mayoría de los integrantes de aquellas consideren procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, devolverán el expediente a la Sala de Casación Laboral para que esta decida”*. Al respecto mediante sentencia SL3501-2022, expedida el 17 de agosto del año en

curso, M.P. Luis Benedicto Herrera Díaz, hace un análisis sistemático y riguroso frente a la forma en que se debe interpretar el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, oportunidad en la que señaló:

“Así las cosas, el citado artículo 34 contiene dos elementos estructurales para establecer el monto de la pensión de vejez: i) una fórmula decreciente para calcular la tasa de reemplazo; y ii) un incremento de esa tasa de reemplazo por semanas de cotización adicionales a las mínimas, hasta llegar a un monto máximo de pensión entre el 80% y el 70.5% del IBL, en forma decreciente en función del nivel de ingresos, calculado con base en la misma fórmula.

(...) Lo anterior indica que cuando la tasa de reemplazo corresponde al 65%, entonces son 500 semanas adicionales las que se necesitan para llegar al máximo del 80%. No obstante, en este caso, como la tasa de reemplazo del 65% se obtiene cuando el ingreso base de liquidación es equivalente a un salario mínimo, el monto deberá ser ajustado al 100% de este salario, con el fin de asegurar que se cumpla el mandato del artículo 35 de la Ley 100 de 1993.

Así mismo, la norma también contempla un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% del ingreso base de liquidación, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula indicada, sin embargo, la parte final del mencionado artículo 34 de forma expresa enfatiza en que, “El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación”, pero en este caso, sin indicar rango alguno de oscilación.

Ahora bien, para la Corte lo lógico es, como lo señaló el legislador, calcular el monto inicial de la pensión conforme a la tasa de reemplazo variable en función del nivel de ingresos de cotización, de suerte que, el monto máximo es directamente proporcional al número de cotizaciones adicionales a las mínimas requeridas, es decir, la tasa de reemplazo pende del nivel de ingresos del afiliado y del monto máximo del número de semanas cotizadas; no obstante, las cotizaciones efectuadas a partir del porcentaje máximo del 80% no se computan, ni procede su devolución, en virtud del principio de solidaridad, expresado en ese tope porcentual sobre el límite de salarios mínimos a los que puede llegar el monto de la prestación pensional otorgada por el Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, con las reformas y adiciones legales ya enunciadas.

En efecto, la fórmula decreciente estableció que para determinar la tasa de reemplazo se resta a 65.50 los salarios mínimos contenidos en el IBL en cada caso, por tanto, si se vuelve a utilizar ésta para calcular el monto máximo de la pensión, se estaría tomando el nivel de ingresos de cotización para disminuir o castigar dos veces el monto de la pensión, lo cual no tiene justificación alguna, pues con la fórmula se pretende desincentivar el aumento injustificado del ingreso base de cotización, pero en manera alguna limitar el número de semanas necesario para alcanzar el monto máximo de la pensión establecido por la misma norma, salvo la del tope legal ahora vigente de 25 SMMLV.

No puede perderse de vista que, en un régimen de pensiones basado en cotizaciones contributivas, como lo es el establecido por la Ley 100 de 1993, la cotización se encuentra atada a la actividad laboral desarrollada por el afiliado, bien sea como trabajador dependiente o como independiente, así, aquella es consecuencia directa del trabajo humano que cuenta con una especial protección constitucional, en consecuencia, no existe razón lógica alguna, en criterio de la Corte, que permita la exclusión de las semanas posteriores a las primeras 500 adicionales a las mínimas, necesarias para alcanzar el monto máximo de la pensión, pues ello, sin duda, vulnera el derecho fundamental al trabajo.

Así las cosas, los afiliados que obtienen una tasa de reemplazo inicial inferior al 65% pueden incrementar el porcentaje con semanas adicionales a las mínimas requeridas, hasta llegar al monto máximo del 80% del ingreso base de liquidación, pues, de lo contrario, la norma no surtiría ningún efecto, ya que con sólo 500 semanas adicionales no se alcanza el monto del 80% del ingreso base de liquidación, que es el máximo que permite la norma.

Por otro lado, nótese que el incremento de la tasa de reemplazo en un 1.5% del ingreso base de liquidación, por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, corresponde a una forma de estimular el trabajo productivo, como valor fundante del

Estado Social de Derecho, dado que el trabajo “es ciertamente un derecho humano (Artículo 25) pero también constituye, al mismo nivel del respeto o la dignidad humana, un principio o elemento fundamental del nuevo orden estatal. Cuando el Constituyente de 1991 decidió garantizar un orden político, económico y social justo e hizo del trabajo requisito indispensable del Estado, quiso significar con ello que la materia laboral, en sus diversas manifestaciones, no puede estar ausente de la construcción de la nueva legalidad” (CC C-542-1992).

El Sistema General de Pensiones consagró la pensión de vejez con la finalidad de sustituir la renta o salario que percibe el afiliado al momento del retiro laboral y, por ello, el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 5 de la Ley 797 de 2003, establece que: “En todo caso, el monto de la cotización mantendrá siempre una relación directa y proporcional al monto de la pensión”.

(...) Como quedó visto, la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003 y el Acto Legislativo 01 de 2005, adoptaron unas reglas con el propósito de evitar distorsiones en el monto de las pensiones que reconoce el régimen de prima media con prestación definida, así: i) una tasa de reemplazo para la pensión de vejez calculada con una fórmula decreciente en función del nivel de ingresos de cotización; ii) un incremento del monto de la pensión en función del número de semanas cotizadas, adicionales a las mínimas requeridas; iii) un monto máximo de la pensión de vejez, que no podrá ser superior al 80% del ingreso base de liquidación; iv) un límite a la base de cotización de 25 salarios mínimos legales, sin perjuicio del aumento hasta de 45 smmlv; y v) la prohibición de pensiones superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Además, con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 se pasó de calcular el ingreso base de liquidación para los afiliados al ISS sobre un promedio de los salarios respecto de los cuales se cotizaban las últimas 100 semanas y en el sector público de lo que se devengaba en el último año, a hacerlo con el promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años anteriores al reconocimiento pensional, o del todo el tiempo si éste fuere superior, con la finalidad de evitar manipulación o fraude en el aumento desmedido en la base de cotización, sin correspondencia con los ingresos realmente percibidos para acceder a mejores prestaciones del sistema.

En ese contexto, queda evidenciada la trasgresión impartida por el Tribunal al artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003, lo que le impidió comprender que el precepto contempla un monto máximo de la pensión de vejez del 80% del ingreso base de liquidación, sin consideración al número de semanas necesario para alcanzar ese tope, pues ello se obtiene de la fórmula general sobre la equivalencia de semanas de cotización a los puntos adicionales a los límites mínimos de la pensión.”

Posición reiterada recientemente en sentencia SL 810 de 2023.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso de autos, se tiene que conforme se desprende de la Resolución SUB 54674 del 1º de marzo de 2021, COLPENSIONES le reconoció a la señora MARIA ORFID LÓPEZ VÉLEZ la pensión de vejez con base en 1.974 semanas cotizadas, teniendo en cuenta un IBL de \$13.493.851 al cual le aplicó una tasa de reemplazo del 72.81% para una mesada inicial de \$9.824.873. Toda vez que la actora no presentó inconformidad respecto al IBL determinado por la entidad, pasará la Sala a estudiar si hay lugar a aumentar el monto que le fue aplicado, conforme la formula descrita en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, así:

$r = 65.50 - 0.50 s$

r = porcentaje del ingreso de liquidación

s = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes dentro del IBL

$r=65.50-0.50$ (**\$13.493.851** /\$877.803)
 $r=65.50-0.50$ (15.37)
 $r=65.50-7.685$
 $r=$ **57.81%**

Teniendo en cuenta un 57.81% y que la actora cotizó 1.974 semanas, según lo reconoce la entidad en la Resolución/50 SUB 54674, es decir 674 semanas adicionales a las 1.300 esta tiene derecho a un incremento del **19.5%** que sumado al **57.81%**, el monto de su pensión debe ser del **77.31%** y no del **72.81%** como lo aplicó Colpensiones por lo que hay lugar al reajuste solicitado.

Por tanto al aplicar el monto del **77.31%** al IBL de **\$13.493.851** determinado por COLPENSIONES en la Resolución/50 SUB 54674 de 2021, se obtiene que la señora MARIA ORFID LÓPEZ VÉLEZ tiene derecho a una mesada pensional de **\$10.432.616** para el 2020, tal como de forma acertada lo analizó el a quo. Reajuste que debe reconocerse a partir del 6 de abril de 2020, toda vez que ninguna mesada se vio afectada de prescripción, dado que la Resolución que reconoció la pensión data del 01 de marzo de 2021 y la demanda se radicó el 16 de febrero de 2022, sin que hubiera transcurrido el término trienal de que tratan los artículos 151 del CPT y la SS y 488 del CST.

En virtud de la Consulta se revisó el retroactivo del reajuste reconocido por el a quo, por las mesadas causadas entre el 6 de abril de 2020 y el 30 de abril de 2023, encontrando que el mismo se encuentra ajustado a derecho, pues si bien presenta una mínima diferencia con el realizado por el a quo de tan solo \$6.645, esto puede obedecer a las decimales utilizados, pero en todo caso, no causa un detrimento para la entidad demandada, por tratarse de una suma irrisoria.

| Año | IPC | Valor reconocido | Valor real | Diferencia mensual | # mesadas | Total retroactivo |
|------------------|--------|------------------|---------------|--------------------|-----------|-------------------|
| 2020 | 1,61% | \$ 9.824.873 | \$ 10.432.616 | \$ 607.743 | 9 | \$ 5.976.140 |
| 2021 | 5,62% | \$ 9.983.053 | \$ 10.600.581 | \$ 617.528 | 13 | \$ 8.027.860 |
| 2022 | 13,12% | \$ 10.544.101 | \$ 11.196.334 | \$ 652.233 | 13 | \$ 8.479.025 |
| 2023 | | \$ 11.927.487 | \$ 12.665.293 | \$ 737.806 | 4 | \$ 2.951.223 |
| TOTAL | | | | | | \$ 25.434.247 |
| VALOR RECONOCIDO | | | | | | \$ 25.440.692 |
| DIFERENCIA | | | | | | \$ 6445 |

Finalmente, en cuanto a la procedencia de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sobre las sumas adeudadas por concepto de reajuste de la mesada pensional, la jurisprudencia siempre había sostenido que los mismos solo eran procedentes en caso de que se

presentara mora en el pago de las mesadas pensionales, más no cuando se diera un reajuste a las mismas. Sin embargo, dicha posición fue recogida en sentencia SL3130 de 2020, al determinar que no existe una razón jurídica objetiva para ello, pues no es lo que se deriva de la norma, interpretada de manera racional y lógica. En esta oportunidad indicó la Corte:

“si se observa con detenimiento el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se puede notar que el legislador no hizo diferenciación alguna a la hora de establecer los intereses moratorios, ni en función de la clase de pensión legal que les sirviera de base, como se dijo recientemente en la sentencia CSJ SL1681-2020, ni teniendo en cuenta si se trataba del pago completo de la mesada pensional o tan solo de algún saldo” añadiendo que “es importante tener en cuenta que la norma consagra los intereses moratorios, en forma pura y simple, «[...] en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales [...]», además de que, en términos jurídicos, la mora en el cumplimiento de una obligación, como el pago de la mesada pensional, se produce tanto por la insatisfacción de todo lo debido como por su pago incompleto o deficitario. En este punto la mora esta conceptualmente ligada al pago de las obligaciones, entendido este, según el artículo 1627 del Código Civil, como «la prestación de lo que se debe», de manera que, mientras no se produzca este pago, en forma adecuada, oportuna y completa, la mora sigue produciendo todas sus consecuencias materiales y reales”

Posición reiterada en las sentencias SL3359-2021, SL3595-2021 y SL3595-2021, entre otras.

Sin embargo, en el caso de autos, se tiene que COLPENSIONES al reconocer la pensión de vejez al actor, lo hizo con el convencimiento que la tasa de remplazo aplicada era la correcta conforme la interpretación que a su modo era la adecuada del artículo 34 de la Ley 100 de 1993, por lo que estima la Sala que al existir controversia frente a cuál era la interpretación correcta de dicha norma, la actuación de la entidad no fue caprichosa, sino que debido de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances que en un momento dado le haya dado la jurisprudencia en su función de interpretar las normas, por lo que conforme a la sentencia con radicado 44454 del 2 de octubre de 2013, no hay lugar a imponer los intereses moratorios.

En consecuencia, se REVOCARÁ la condena a intereses moratorios y en su lugar se **CONDENARÁ** a la **INDEXACIÓN** de las suma adeudadas por concepto de reajuste pensional, , la cual deberá calcularla la entidad demandada, teniendo en cuenta como dice inicial el IPC certificado por el DANE para la fecha de causación de cada mesada y como índice final el vigente a la fecha del pago, aplicando la siguiente fórmula: ***Indexación = índice final/ índice inicial x capital – capital***.

En consecuencia, la sentencia de primera instancia será **CONFIRMADA PARCIALMENTE con las modificaciones a** que se hizo referencia.

Costas en esta instancia a cargo de COLPENSIONES por no haber tenido éxito en el recurso. En esta instancia se fijan las agencias en derecho en la suma de \$1.160.000.

4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

DECIDE

PRIMERO: CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia proferida el 28 de abril de 2023 por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por la señora **MARIA ORFID LÓPEZ VÉLEZ** identificada con c.c. 43.009.269 contra **COLPENSIONES**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: REVOCA el numeral tercero y en su lugar **CONDENA** a **COLPENSIONES** a a indexar la suma adeudada por reajuste pensional, liquidación que corresponderá efectuarla a la entidad desde la fecha de causación de cada mesada y hasta la fecha efectiva del pago de dicha obligación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO: Costas en esta instancia a cargo de COLPENSIONES por no haber tenido éxito en el recurso. En esta instancia se fijan las agencias en derecho en la suma de \$1.160.000.

Lo anterior se notificará en EDICTOS que se fijarán por el término de un día.

Los Magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Demandante: **MARI ORFID LÓPEZ VÉLEZ**
Demandado: **COLPENSIONES**
Radicado No.: **05001-31-05-014-2022-00060-01**
Decisión: **MODIFICA SENTENCIA**
Fecha de la sentencia: **11/12/2023**

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy **12/12/2023** desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario